



SÍNDIC DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

<p>SÍNDIC DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA REGISTRE GENERAL</p> <p>18/10/2012</p> <p>EIXIDA NÚM. 59398</p>

Conselleria de Justicia y Bienestar Social
Hble. Sr. Conseller
Ps. de l'Albereda, 16
VALENCIA - 46010 (Valencia)

=====
Ref. Queja nº 1209944
=====

Asunto: Atención a la situación de dependencia.

Hble. Sr.:

Acuso recibo de su escrito en relación con la queja de referencia, iniciada a instancia de D. (...) sobre el asunto mencionado. De dicho escrito, de la documentación aportada por la persona interesada y de todo lo actuado se deduce que solicitó la valoración y ayudas para su esposa D^a. (...), a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia.

Se le reconoció un Grado II, nivel 1, de dependencia, resolviéndose el Programa Individual de Atención en fecha 07 de agosto de 2009, en el que se asignaba la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidador no profesional.

En fecha 18 de abril de 2011 se reconoce un Grado III, nivel 1, cuyo Programa Individual de Atención asigna atención residencial en el Centro para PMD Parqueluz de Catarroja, estableciendo como participación en el coste del servicio la cantidad de 345,22 euros / mes durante 2011.

En fecha 19 de enero de 2012 se modifica la valoración de dependencia a un Grado III, nivel 2, con efectos del día siguiente a la resolución.

El interesado ha solicitado los efectos retroactivos de la prestación reconocida en las siguientes fechas: 14/04/2011; 30/05/2011; 14/07/2011; 28/09/2011 y 09/01/2012 y 13/04/2012.

En su informe la Conselleria de Justicia y Bienestar Social nos indica lo siguiente :

La interesada fue valorada inicialmente con un grado II, nivel 1, resolviéndose su programa Individual de Atención con la prestación de cuidador no profesional en fecha 07/08/2009. Debido a un agravamiento de sus patologías, solicitó la revisión de su valoración por la que obtuvo un Grado III, nivel 1, mediante resolución de fecha 26/11/2010.

Por lo tanto, la interesada deberá solicitar la retroactividad de este periodo (07/08/2009 – 17/04/2011) en el que estuvo cobrando según la valoración inicial y ya se le había resuelto el expediente de revisión, una vez recibida la solicitud se procederá a su estudio.

Posteriormente, el 18/04/2011 fue resuelto el nuevo PIA de expediente de revisión con el servicio de atención residencial, a solicitud de la interesada, con fecha de efectos desde esa misma fecha puesto que fue cuando ingresó en plaza pública concedida.

El 28 /03/2011 solicita nueva revisión, la cual fue resuelta el 19/01/2012, concediéndole un Grado III, nivel 2, por lo que si la beneficiaria continúa con el servicio residencial no cabe revisión alguna del PIA, puesto que el copago seguirá siendo el mismo ya que éste no depende de su grado y nivel.

La propia Conselleria de Justicia y Bienestar Social reconoce la posibilidad de que la beneficiaria tenga derecho al cobro de los efectos retroactivos desde 07/08/2009 al 17/04/2011 e insta a que se presente la correspondiente solicitud.

La referida solicitud ha sido presentada ante la Conselleria de Justicia y Bienestar Social en seis ocasiones, la primera el 14/04/2011 y la última el 13/04/2012.

El artículo 1 de la Ley de la Dependencia crea un derecho subjetivo para las personas en situación de dependencia en los términos establecidos en las leyes. Este derecho se compone de un nivel mínimo, igual para todos los españoles, financiado exclusivamente por la Administración General del Estado (artículos 1, 7.1º y 9 de la Ley). El Real Decreto 614/2007 fijó este nivel mínimo para los distintos grados de dependencia en 2007 y el Real Decreto 6/2008 para 2008.

Existe un segundo nivel fijado mediante acuerdos entre la Administración General del Estado y cada Comunidad Autónoma (artículos 8.2 y 10 de la Ley). El acuerdo con la Comunitat Valenciana fue suscrito el 21 de diciembre de 2005 (DOCV 15-1-2008) y contempla, entre otros extremos, el nivel mínimo y ayudas económicas para facilitar la autonomía personal (cláusulas tercera, 4 y cuarta). El Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, modificado por Real Decreto 175/2011, de 11 de febrero, estableció las intensidades de protección de los servicios y las cuantías de las prestaciones económicas de los distintos grados y niveles de dependencia, siendo éstas actualizadas anualmente.

Por último, existe un tercer nivel de financiación exclusivamente autonómica (artículo 7.3º de la Ley). Este tercer nivel se ha establecido en la Comunitat Valenciana en hasta un 15% adicional para prestaciones económicas (artículo 23.1.a) de la Orden de la Conselleria de Bienestar Social, de 5 de diciembre de 2007).

Hasta aquí la referencia a las prestaciones. La Ley apuesta por un amplio abanico de prestaciones técnicas, de preferencia sobre las prestaciones económicas. El Catálogo de Servicios del Sistema, recogido en el artículo 15, es el siguiente:

- *Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía personal.*
- *Servicio de Teleasistencia.*
- *Servicio de Ayuda a domicilio:*
 - *Atención a las necesidades del hogar.*
 - *Cuidados personales.*
- *Servicio de Centro de Día y de Noche:*
 - *Centro de Día para mayores.*
 - *Centro de Día para menores de 65 años.*
 - *Centro de Día de atención especializada.*
 - *Centro de Noche.*
- *Servicio de Atención Residencial:*
 - *Residencia de personas mayores en situación de dependencia.*
 - *Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los distintos tipos de discapacidad.*

La intensidad de protección de cada uno de los servicios prestados ha sido objeto de desarrollo reglamentario a través del Real Decreto 727/2007, modificado por Real Decreto 175/2011, de 11 de febrero, como se ha indicado.

La Ley regula, escasamente, el procedimiento para obtener las ayudas y prestaciones (artículo 28), refiriéndose a la forma de iniciarlo, a la valoración, a la elaboración del Programa Individual de Atención como instrumento que definirá las prestaciones adecuadas a cada caso. El Consell aprobó el Decreto 18/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas en situación de dependencia. Esquemáticamente, el procedimiento consiste en: solicitud indicando preferencia por la prestación o servicio a recibir, subsanación, en su caso, de la solicitud inicial, informe del entorno, valoración en domicilio, propuesta de resolución de grado y nivel, resolución del grado y nivel, informe social, elaboración del Programa Individual de Atención (PIA) y resolución de PIA.

La Resolución en la que se determinen los servicios o prestaciones que correspondan a la persona beneficiaria, según su grado y nivel de dependencia, surtirá efectos desde la fecha de aprobación del correspondiente PIA, tal y como establece el artículo 10.3 del Decreto 18/2011, de 25 de febrero. La Resolución del Programa Individual de Atención deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de registro de entrada de la solicitud de dependencia, según lo dispuesto en el artículo 11.4 del referido Decreto. Si transcurrido el plazo indicado no se hubiera resuelto en cuanto al servicio o prestación, el derecho se

generará desde el día siguiente al del cumplimiento del plazo máximo de seis meses (art. 11.6).

La falta de cumplimiento de los plazos para resolver expedientes conlleva la inobservancia de la normativa aplicable al respecto. En efecto, se vulnera lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que determina que el plazo máximo en el que debe notificarse por la Administración la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.

El artículo 47 de la Ley 30/1992 establece que la observancia de los plazos es obligatoria y su artículo 41, igualmente, obliga a la adopción de las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anomalía en la tramitación de los procedimientos. Con independencia de que el artículo 43.1 establece los efectos de la falta de resolución expresa (silencio administrativo), la Administración tiene obligación expresa de resolver, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 30/1992.

El Estatut de Autonomía valenciano establece:

Sin perjuicio de lo que dispone la legislación básica del Estado, una Ley de Les Corts regulará el derecho a una buena administración (art. 9.1). (...) Todos los ciudadanos tienen derecho a que las administraciones públicas de La Generalitat traten sus asuntos de modo equitativo e imparcial y en un plazo razonable y a gozar de servicios públicos de calidad (art. 9.2). (...) En todo caso, la actuación de La Generalitat se centrará primordialmente en los siguientes ámbitos: (...) la no discriminación y derechos de las personas con discapacidad y sus familias a la igualdad de oportunidades (art. 10.3). (...) La Generalitat, conforme a la Carta de Derechos Sociales, garantizará en todo caso a toda persona afectada de discapacidad, el derecho a las prestaciones públicas necesarias para asegurar su autonomía personal, su integración socioprofesional y su participación en la vida social de la comunidad (art. 13.1). (...) La Generalitat procurará a las personas afectadas de discapacidad su integración por medio de una política de igualdad de oportunidades, mediante medidas de acción positiva, y garantizará la accesibilidad espacial de las instalaciones, edificios y servicios públicos (art. 13.2). (...) La Generalitat garantizará el derecho de acceso a una vivienda digna de los ciudadanos valencianos. Por ley se regularán las ayudas para promover este derecho, especialmente en favor de (...) personas afectadas por discapacidad (art. 16).

La Ley de la Dependencia entró en vigor el día 1 de enero de 2007 (Disposición Final Novena), si bien sujeta a un régimen de transitoriedad según el cual en 2007 deberían ser valorados los dos niveles de dependencia del grado III (Disposición Final Primera). Sin embargo, la Administración General del Estado aprobó el baremo de valoración mediante Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, el nivel mínimo de protección por Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo (BOE 12-5-2007), las intensidades de las prestaciones por Reales Decretos 175/2011, de 11 de febrero y 570/2011, de 20 de abril, y sendas Resoluciones de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la

dependencia sobre determinación de la capacidad económica del beneficiario y sobre los criterios de participación de éste en las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del SAAD.

Por tanto, le **RECOMIENDO** a la **Conselleria de Justicia y Bienestar Social** que proceda de manera urgente a reconocer y otorgar los efectos retroactivos de las prestaciones que, de acuerdo con la valoración y el programa individual de atención, han correspondido a D^a (...), dado que ha quedado acreditado que, por parte de la beneficiaria, se ha presentado la solicitud correspondiente hasta en seis ocasiones.

Le agradecemos nos remita en el plazo de un mes el preceptivo informe en el que nos manifieste la aceptación o no de la sugerencia que se realiza o, en su caso, las razones que estime para no aceptarla.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que a partir de la semana siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se insertará en la página Web de la Institución.

Atentamente le saluda,

José Cholbi Diego
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana